

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO:	741
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2018-00070-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
DEMANDADOS:	CORNELIO GÓMEZ GARCÍA y MARLEN GÓMEZ GARCÍA (sucesores procesales de la extinta NUBIA GARCÍA DE GÓMEZ)
VINCULADA:	MARÍA DEL CARMEN CRUZ DE SOTO
ASUNTO:	Concesión amparo de pobreza y reitera requerimiento

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Se procede a decidir la solicitud de amparo de pobreza presentada por el señor Cornelio Gómez García, quien con fundamento en el artículo 151 del CGP deprecó que se le exonere, en el evento de causarse, del pago de los gastos de representación judicial y de las expensas que pueda generar el trámite del proceso.

En efecto, el artículo 151 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, consagra que el amparo de pobreza se concederá a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso.

En cuanto a la oportunidad, competencia, requisitos, trámite y efectos del amparo de pobreza, el CGP prevé:

**“ARTÍCULO 151. PROCEDENCIA.** Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso”.

**“ARTÍCULO 152. OPORTUNIDAD, COMPETENCIA Y REQUISITOS.** El amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso.

*El solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el artículo precedente, y si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado.*

*Cuando se trate de demandado o persona citada o emplazada para que concurra al proceso, que actúe por medio de apoderado, y el término para contestar la demanda o comparecer no haya vencido, el solicitante deberá presentar, simultáneamente la contestación de aquella, el escrito de intervención y la solicitud de amparo; si fuere el caso de designarle apoderado, el término para contestar la demanda o para comparecer se suspenderá hasta cuando este acepte el encargo”.*

**“ARTÍCULO 153. TRÁMITE.** Cuando se presente junto con la demanda, la solicitud de amparo se resolverá en el auto admisorio de la demanda (...).”

**“ARTÍCULO 154. EFECTOS.** El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en costas.

*En la providencia que conceda el amparo el juez designará el apoderado que represente en el proceso al amparado, en la forma prevista para los curadores ad litem, salvo que aquel lo haya designado por su cuenta.*

*El cargo de apoderado será de forzoso desempeño y el designado deberá manifestar su aceptación o presentar prueba del motivo que justifique su rechazo, dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación de la designación; si no lo hiciere, incurrirá en falta a la debida diligencia profesional, será excluido de toda lista en la que sea requisito ser abogado y sancionado con multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) (...).*

*Salvo que el juez rechace la solicitud de amparo, su presentación antes de la demanda interrumpe la prescripción que corría contra quien la formula e impide que ocurra la caducidad, siempre que la demanda se presente dentro de los treinta (30) días siguientes a la aceptación del apoderado que el juez designe y se cumpla lo dispuesto en el artículo 94.*

*El amparado gozará de los beneficios que este artículo consagra, desde la presentación de la solicitud”.*

En congruencia con el anterior marco normativo, se procede a estudiar los requisitos a fin de determinar si la solicitud de amparo de pobreza es procedente.

El amparo de pobreza es una garantía que tiene sustento normativo en la Ley 270 de 1996, pues el artículo 2 prevé: “El Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública”, y el artículo 6 *ibídem* consagra: “la administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley (...). No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales. Tampoco podrán cobrarse aranceles a las personas de escasos recursos cuando se decrete el amparo de pobreza o en aquellos procesos o actuaciones judiciales que determinen la ley”.

Tal prerrogativa también se funda en el derecho fundamental de igualdad ante la ley y las autoridades (art. 13 CN) y en el principio procesal de equilibrio real de las partes (art. 4 CGP), la cual adquiere especial relevancia en el proceso contencioso laboral por la relación asimétrica que existe entre el empleado y el empleador, motivo por el cual el ordenamiento jurídico prevé una serie de medidas que los funcionarios administrativos y judiciales pueden adoptar para asegurar la paridad entre los sujetos procesales, entre ellas el amparo de pobreza, que se erige en una de las más democráticas y efectivas, pues la persona que carezca de capacidad económica tendría acceso efectivo a la administración de justicia sin incurrir en costos y gastos que por su onerosidad no podría asumirlos sin desmedro de su propia subsistencia y la de quienes por ley deba alimentos.

La sentencia T-339/18 de la Corte Constitucional, M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez, precisó el alcance de esa figura procesal en los siguientes términos:

*“El amparo de pobreza es una institución de carácter procesal desarrollada por el Legislador para favorecer a las personas que por su condición socioeconómica no pueden sufragar los gastos derivados de un trámite judicial. De manera que esta figura se instituye legislativamente como una excepción a la regla general, según la cual, en las partes recae el deber de asumir los costos que inevitablemente se producen en el trámite jurisdiccional, para en su lugar, proteger a las personas que se encuentran en una situación extrema, representada en la carga que se les impondría al obligarlas a elegir entre procurar lo mínimo para su subsistencia o realizar pagos judiciales para el avance del proceso en el que tienen un interés legítimo. Con ello queda claro que el propósito del amparo de pobreza no es otro distinto al interés de asegurar que todas las personas puedan acceder a la administración de justicia en igualdad de condiciones y que, por ende, puedan ejercer los derechos de defensa o contradicción, sin que exista distinción en razón de su situación socioeconómica.*

*Para el reconocimiento del amparo de pobreza, deben cumplirse, en todos los casos, dos presupuestos fácticos esenciales. En primer lugar, debe presentarse la solicitud de amparo de pobreza de manera personal, afirmando bajo juramento que está en las condiciones previstas*

*en el artículo 151 del Código General del Proceso. En otras palabras, la persona interesada debe presentar una petición formal y juramentada ante el juez competente. Así lo ha señalado esta Corporación al precisar que el amparo pobreza tiene una naturaleza personal, es decir, que su reconocimiento no puede tramitarse de manera oficiosa por el funcionario judicial, sino que su procedencia, en específico, dependerá de la solicitud que haga la persona que no cuenta con la capacidad económica para sufragar los gastos del proceso, constituyéndose en una carga procesal para la parte o el interviniente que pretenda beneficiarse de esta institución. En segundo término, este beneficio no puede otorgarse a todas las personas que de manera indiscriminada lo soliciten, sino únicamente a aquellas que reúnan objetivamente las condiciones para su reconocimiento, a saber, que soliciten de forma personal y motivada el amparo, y acrediten la situación socioeconómica que lo hace procedente”.*

Y, la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Laboral, en providencia dictada el 21 de octubre de 2020, expediente No. 86386, M.P. Fernando Castillo Cadena, expuso:

*“(…) conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del CGP, aplicable por emisión del 145 del CPTSS, se puede conceder el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas que por ley debe alimentos, salvo cuando se pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso.*

*Dicho instrumento procesal es garantía del **derecho fundamental a la igualdad** previsto en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 2 del precepto 42 del CGP, que ordena al Juez hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso. Lo anterior cobra especial importancia en el proceso laboral en el que se deben considerar las circunstancias de debilidad del trabajador, afiliado o beneficiario, frente al empleador o a las administradoras del sistema general de seguridad social, según el caso, por lo que se debe remover cualquier obstáculo que pueda impedir a alguno de estos a intervenir en esta clase de juicio.*

*De igual manera, es oportuno recordar que el **derecho de acceso a la administración de justicia** no se agota con la sola posibilidad de hacer parte de un proceso judicial, sino que se debe garantizar ser escuchado e intervenir activamente en él, no solo para solicitar y controvertir las pruebas sino también para interponer los recursos ordinarios y extraordinarios que sean procedentes. Por regla general dicha intervención se debe realizar a través de un profesional del derecho, ya que solo por excepción se permite actuar en causa propia.*

*En ese orden, la falta de capacidad para asumir los costos de un abogado para ser representado dentro de un proceso judicial sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia o la de las personas a quienes por ley se debe alimentos, no puede representar un impedimento para ejercer el derecho de defensa en cualquier clase de proceso, ni es válido imponer cargas excesivas o ritualismos que impidan acceder al amparo por pobre que establece la ley para quienes lo requieran (...).”*

Ahora bien, en cuanto al primero de tales requisitos, se advierte que el señor Cornelio Gómez García manifestó bajo la gravedad juramento que carece de los medios económicos para sufragar los gastos que demanda su defensa judicial y los costos del proceso, declaración que por sí sola es suficiente para acreditar tal circunstancia, no sólo porque está amparada por el principio y la presunción de buena fe (art. 83 CN), sino porque también se trata de una negación indefinida que no requiere de prueba (art. 167 CGP), por lo que le incumbiría desvirtuarla a la parte que se opusiere a la solicitud de amparo de pobreza.

Adicionalmente, nótese, que la presente controversia versa sobre la presunta ilegalidad de la Resolución No. GNR 70605 del 4 de marzo de 2016, mediante la cual se le reconoció y ordenó el pago de la sustitución pensional por el fallecimiento del señor Luis Alfredo Gómez Vargas, prestación que a su vez fue sustituida en un porcentaje del 50% al señor Cornelio Gómez García, en calidad de hijo inválido del causante y la también extinta Nubia Garcia de Gómez, lo cual permitiría considerar que en principio su discapacidad le impide tener un empleo, y el porcentaje que recibe de la pensión de sobrevivientes es destinado a procurar su subsistencia congrua.

En lo atinente a la oportunidad, se puede solicitar antes de presentar la demanda, y en el curso del proceso por cualquiera de las partes, de modo que la petición del demandado se hizo en tiempo; y teniendo en cuenta que la especialidad de los asuntos atribuidos a la

jurisdicción de lo contencioso administrativa requiere que el derecho de postulación sea ejercido por un profesional del derecho, el artículo 160 del CPACA, en concordancia con el artículo 73 del CGP, prescribe que las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.

En consecuencia, se acogerá la solicitud del señor Cornelio Gómez García y, por lo tanto, se le concederá el amparo de pobreza, de manera que se le asignará un abogado de oficio para que lo represente como demandado, en calidad de sucesor procesal en el juicio que promovió la Administradora Colombiana de Pensiones contra la señora Nubia García de Gómez, y se le exonerará de prestar cauciones procesales y del pago de expensas, honorarios de auxiliares de la justicia y otros gastos en los que pueda incurrir.

Para la designación del apoderado que representaría al sujeto amparado por pobre, se aplicarán las reglas previstas en el artículo 154 del CGP y en el artículo 14 del Acuerdo No. PSAA15-10448 expedido el 28 de diciembre de 2015 por el Consejo Superior de la Judicatura “*Por el cual se reglamenta la actividad de Auxiliares de la Justicia*”, de los cuales este último remite al numeral 7 del artículo 48 y siguientes del CGP y, por consiguiente, se integrará una terna con los siguientes abogados:

1. Dr. Carlos Enrique Guevara Sin, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.015.410.064 y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 241673 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, quien recibe notificaciones en el correo electrónico [carlos.quevarasin@tiglegal.com](mailto:carlos.quevarasin@tiglegal.com), y abonado telefónico (601) 4629470.
2. Dra. Mónica Liliana Sanabria Uribe, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.032.482.911 expedida en Bogotá, y titular de la tarjeta profesional de abogada No. 362244 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, quien recibe notificaciones en el correo electrónico [notificaciones@organizacionsanabria.com.co](mailto:notificaciones@organizacionsanabria.com.co), y abonado telefónico (601) 2822816.
3. Dr. Christian Alirio Guerrero Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.012.387.121 expedida en Bogotá, y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 362438 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, quien recibe notificaciones en los correos electrónicos [proteccionjuridicadecolombia@gmail.com](mailto:proteccionjuridicadecolombia@gmail.com) y [poderesprotiucol@gmail.com](mailto:poderesprotiucol@gmail.com), y abonados telefónicos 3203040078, 3132407625 y 3124458908.

Por Secretaría se comunicará la designación a los togados por el medio más expedido y se le notificará el presente auto con los apremios del numeral 7 del artículo 48 del CGP.

Por otra parte, se advierte que vencido el término concedido en el auto de sustanciación No. 286 del 29 de mayo de 2023, la señora Marlén Gómez García no ha designado defensor público que represente sus intereses en el proceso de la referencia, ni solicitó el amparo de pobreza, por lo que se le requerirá por última vez para que allegue el respectivo poder, so pena de proseguir con el proceso.

En consecuencia, se dispone:

1. CONCEDER el amparo de pobreza solicitado por señor Cornelio Gómez García.
2. INTEGRAR de la lista oficial de auxiliares de la justicia para el cargo de curador *ad-litem* la terna de abogados de oficio de la cual se designará al apoderado que representará al demandado, con los siguientes togados: Dr. Carlos Enrique Guevara Sin, Dra. Mónica Liliana Sanabria Uribe y Dr. Christian Alirio Guerrero Gómez. Por Secretaría, comuníquese su designación por el medio más expedido y notifíquese el presente auto con los apremios del numeral 7 del artículo 48 del CGP.
3. REQUERIR por última vez a la señora Marlén Gómez García para que en el término de cinco (5) días, contado desde el día siguiente a la notificación del presente auto, designe

un defensor público que represente sus intereses en el proceso de la referencia y allegue el respectivo poder, en su condición de sucesora procesal de la parte demandada, dada su calidad de hija de la extinta Nubia García de Gómez, so pena de proseguir con el proceso o, en su defecto, solicite el amparo de pobreza para que se le designe un apoderado de oficio en los términos de los artículos 151 y ss. del CGP.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ**  
Juez

KPG

Firmado Por:  
Humberto Lopez Narvaez  
Juez  
Juzgado Administrativo  
027  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 8288e375c03607e7592775a4336fd9dfc04feaa59dcac2dc06d3190b14be2bb9

Documento generado en 28/09/2023 08:20:25 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>